

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501420090087002
Proceso:	Ordinario
Demandante:	RAMÓN ANTONIO RIVERA ARIAS
Demandado:	SOTRA SAN VICENTE Y GUATAPÉ LA PIEDRA Y NEFTALÍ ARBELÁEZ
M. P.	María Patricia Yepes García SL TSM
Fecha De Fallo:	08/03/2024
Decisión:	Revoca

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 13/03/2024 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

DEMANDANTE	RAMÓN ANTONIO RIVERA ARIAS
DEMANDADA	SOTRA SAN VICENTE Y GUATAPÉ LA PIEDRA Y NEFTALÍ ARBELÁEZ
ORIGEN	Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	050013105014200900870 02
TEMAS	Indemnización de perjuicios, pensión de invalidez
CONOCIMIENTO	Consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

La Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 se constituye en audiencia para proferir sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RAMÓN ANTONIO RIVERA ARIAS contra SOTRA SAN VICENTE Y GUATAPÉ LA PIEDRA y el señor NEFTALÍ ARBELÁEZ.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Ramón Antonio Rivera Arias formula demanda contra Sotrasanvicente y Guatapé La Piedra y el señor Neftalí Arbeláez, pretendiendo se declare, **i)** que entre las partes existió una relación de carácter laboral, **ii)** que tuvo unas lesiones y secuelas que conllevaron a la merma en su capacidad laboral del 75% y las mismas fueron producto de un accidente laboral, **iii)** que los demandados tenían obligación legal y constitucional de afiliar al accionante al Sistema de Seguridad Social Integral, que como consecuencia de lo anterior se condene, **iv)** al pago de **la indemnización plena y ordinaria de perjuicios**, por la merma de su capacidad laboral y los daños físicos sufridos por el accidente laboral ocurrido el 15 de octubre de 2004², **v)** al reconocimiento y pago de la **pensión de invalidez** a que hubiera tenido derecho de haberse cumplido la obligación constitucional y legal de afiliarlo al Sistema General

¹ 01ExpedienteEscaneado, págs. 3/8

² El accionante advierte que el accidente ocurrió el 15 de octubre de 2004, sin embargo, se realiza la salvedad de que la administración municipal de San Rafael aclara que el accidente ocurrió el 15 de mayo de 2004, lo que se puede constatar en el archivo denominado " 01ExpedienteEscaneado" pág. 215 y 216

de Riesgos Profesionales, **vi)** retroactividad de la pensión desde el día 15 de octubre de 2004³; **vii)** lo ultra y extra petita, **viii)** costas procesales; y finalmente **ix)** indexación. Fundamentó sus pretensiones en que **se vinculó laboralmente mediante contrato verbal de trabajo con el señor Neftalí Arbeláez**, desde mediados del año 2002 hasta el día 15 de octubre de 2004, desempeñándose como **ayudante de ruta de un bus de servicio público** de propiedad del señor Neftalí Arbeláez, vehículo afiliado a la empresa Sotra San Vicente y Guatapé la Piedra, realizando funciones tales como la recolección de tiquetes, acomodación de los pasajeros, organización de maletas, velar por el buen desarrollo del viaje, entre otras. Recibiendo una asignación salarial mensual por valor de \$650.000. Que en desarrollo de las actividades laborales el día 15 de octubre de 2004 **se encontraba en la taquilla ubicada al interior de la cafetería** denominada “el portal” y fue **en la labor de organización de pasajeros y su equipaje** que resultó como **víctima de una fuerte explosión producto de un ataque terrorista**, pues indica se encontraba ingresando una maleta en la bodega del bus al momento del siniestro, como consecuencia de lo anterior obtuvo un dictamen de Medicina Legal el 16 de septiembre de 2004, en el que se relacionaron las múltiples lesiones y secuelas que sufrió, mismas que le produjeron una merma en su capacidad laboral del 75%, que le impidieron laborar por más de 6 meses, **y cuando pudo retomar a su labor a pesar de las secuelas no fue recibido, quedando de forma automática despedido** y sin haberle satisfecho suma alguna por concepto de incapacidad, dejándolo en una condición de total indefensión frente a la vida, pues no se encuentra en la posibilidad de obtener otro empleo debido a las lesiones derivadas del accidente de trabajo.

Finalmente expone que los codemandados incurrieron en diversas **omisiones** como lo son, su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, la omisión del pago de prestaciones sociales, así como la del pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales al momento de dar por terminado el contrato laboral.

Oposición a las pretensiones de la demanda

i. Neftalí Arbeláez Hincapié⁴

se opone a todas y cada una de las pretensiones, para ello advierte que no se encuentran los presupuestos para ser condenado al reconocimiento y pago de tales prestaciones por cuanto no tuvo suscrita ninguna relación laboral con el actor, para ello advierte que por su parte nunca se impartieron órdenes, tampoco se fijaron horarios, ni se pagó salarios, pues quien tenía a su disposición el **usufructo** del vehículo era persona distinta a él, advirtió que el vehículo no era exclusivamente de su propiedad, pues era **copropietario** con el señor **Guillermo Salazar Ramírez**, niega que el accidente haya sobrevenido por causa o con ocasión del trabajo encomendado al actor, pues el demandante no se encontraba al momento del siniestro prestando sus servicios ni al aquí citado demandado, ni a ninguna otra persona a cargo del bus, sino sentado en la calle cuando ocurrió una explosión que advierte fue provocada por grupos al margen de la ley, por lo que indica no tendría ninguna relación el aquí demandado; finalmente se opone a la condena en costas y

³ Se realiza igual anotación a la anterior, el accidente ocurrió el 15 de mayo de 2004 por lo antes mencionado.

⁴ 01ExpedienteEscaneado, págs. 65/72.

agencias en derecho pues su actuación fue de buena fe, y así como no tienen asidero las pretensiones iniciales menos lo habría respecto a la indexación.

Excepcionó: de forma previa falta de jurisdicción y competencia, de fondo excepcionó la falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción, pago y compensación, inexistencia de la relación laboral, la que llamó genérica.

ii. Sotrasanvicente & Guatapé la piedra S.C.A.⁵

El demandante no ha tenido ningún vínculo con la entidad, por tanto, no le es posible afirmar la procedencia del reconocimiento y pago de las prestaciones que afirma en el escrito genitor. Advierte que Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra S.C.A. no existía para la época de los hechos, que lo que existió fue un contrato societario entre el actor y el señor **Jaime de Jesús Castro García** quien fuera la persona que contaba con el **usufructo del vehículo** cancelándole al actor como contraprestación el 20% del valor de lo recaudado en cada viaje, afirmó en igual sentido como la otra parte codemandada en su contestación que el vehículo no era exclusivamente de su propiedad, pues era **copropietario con el señor Guillermo Salazar Ramírez**, finalmente trajo a colación iguales aseveraciones que las referenciadas por el otro codemandado frente a las circunstancias en las que ocurrió el accidente, se opone a ser condenado en costas, así como a la indexación. Excepcionó: de forma previa falta de jurisdicción y competencia, de fondo la falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción, pago y compensación, inexistencia de la relación laboral, la que llamó genérica

Sentencia de primera instancia⁶

El 31 de julio de 2014, el Juzgado Noveno Laboral de descongestión del Circuito de Medellín profirió sentencia **absolviendo** al señor Neftalí Arbeláez y a la empresa Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra, de las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, **declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación**. Así mismo, condenó en **costas al actor**, fijando como agencias en derecho la suma de \$308.000 a favor de la sociedad demandada.

Para sustentar su decisión la A Quo estimó que ni documental, ni testimonialmente se estableció la concurrencia de los tres elementos esenciales para la configuración del contrato de trabajo, sostuvo que si bien podía deducirse que se dio una prestación personal del servicio, indica que la misma fue realizada a favor del señor Jaime sin que este fuera demandado en el presente proceso, no estimó por tanto probada la subordinación frente a los demandados, estimando la relación con estos ajena a una relación laboral, de igual modo indicó que no obraba prueba que permitiera establecer los extremos de la relación laboral, concluyendo por ello probada la excepción de inexistencia de la obligación.

Recurso de apelación⁷

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante formuló y sustentó recurso de apelación en su contra, sin embargo, en auto del 23 de

⁵ 01ExpedienteEscaneado, págs. 74/81

⁶ 01ExpedienteEscaneado, págs. 258/276

⁷ 01ExpedienteEscaneado, págs. 278/286

septiembre de 2014 el Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín se abstuvo de conceder el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, argumentando su extemporaneidad, y en lugar, concedió el grado jurisdiccional de consulta⁸.

Así las cosas, la apoderada de la parte demandante, interpuso y sustentó recurso de reposición y en subsidio apelación, contra el referido auto que se abstuvo de conceder la impugnación⁹. El expediente se remitió en principio a la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, donde se avocó conocimiento del presente proceso¹⁰ el 23 de febrero de 2015, pero en razón de la terminación de las medidas de descongestión adoptadas, se repartió el proceso a la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín donde el 22 de febrero de 2016 se avocó el conocimiento del presente proceso¹¹, advirtiéndole que la apoderada de la parte demandante había interpuesto y sustentado el recurso de reposición y en subsidio apelación, contra la providencia que negó la apelación de la sentencia por extemporánea, y al verificar que no había sido resuelto de fondo por el A Quo el primero de tales recursos, se ordenó enviar el expediente al despacho de origen para lo pertinente, pues el Juzgado que emitió la providencia recurrida, fue suprimido.

Por lo anterior que, el 13 de junio de 2016 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín avocó el conocimiento del proceso¹², **desestimó el recurso impetrado**, y dispuso nuevamente remitir el expediente a esta corporación para surtir el grado jurisdiccional de consulta. Insistió la apoderada de la parte demandante en su solicitud de concesión del recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia¹³. El 2 de diciembre de 2016 el despacho de la Magistrada Ponente dispuso la devolución del expediente al Juzgado de origen en aras de que resolviera tal solicitud de la parte demandante¹⁴.

Ahora bien, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 22 de agosto de 2017, se pronunció desestimando nuevamente lo peticionado por la recurrente¹⁵, y dispuso enviar el expediente a esta corporación, para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Concedido el termino para alegar de conclusión, solo fue descorrido por la **parte demandante**¹⁶, quien solicitó se revoque en su totalidad la sentencia de la Aquo, y en su lugar se acojan todas y cada una de las pretensiones invocadas por el demandante, entre ellas la declaración de existencia de contrato de trabajo entre las partes en contienda, estimando probados los elementos de la relación laboral, así como los extremos temporales comprendidos entre mediados del 2002 y el 15 de mayo de 2004, fecha del atentado; señalo la existencia de la solidaridad entre el contratista y la empresa; sostuvo que las lesiones padecidas, ocurrieron en accidente

⁸ 01ExpedienteEscaneado, págs. 287

⁹ 01ExpedienteEscaneado, pág. 290

¹⁰ 01ExpedienteEscaneado, pág. 289

¹¹ 01ExpedienteEscaneado, pág. 301

¹² 01ExpedienteEscaneado, pág. 309 y 310

¹³ 01ExpedienteEscaneado, págs. 312 y 313

¹⁴ 01ExpedienteEscaneado, pág. 314

¹⁵ 01ExpedienteEscaneado, pág. 319/321

¹⁶ 01ExpedienteEscaneado, págs. 323/331

de trabajo, además de contar una con una pérdida de capacidad laboral suficiente para tener derecho a la pensión de invalidez, la cual deberá ser asumida por los demandados en tanto no le realizaron afiliación al sistema de seguridad social.

Argumenta haber demostrado la concurrencia de los 3 elementos esenciales para la configuración de un vínculo laboral a la luz del art. 23 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el art. 1 de la ley 50 de 1990, sosteniendo que **aun cuando el actor hubiese sido contratado por el señor Jaime de Jesús Castro García** (quien fungía como administrador del bus) , lo hizo por la autorización de los aquí codemandados pues fueron ellos quienes nombraron al señor Castro como administrador, **situación que no exoneraba de las obligaciones laborales a la empresa transportadora ni al señor Neftalí Arbeláez, sino que por el contrario, les acarrea responsabilidad solidaria.**

En adición a los alegatos, la parte actora se pronunció respecto de la prueba de oficio decretada¹⁷, indicando que de ella se extrae que el vehículo de placas WLJ944 perteneció al señor Neftalí Arbeláez desde el 15 de mayo de 1994 y hasta el 09 de noviembre de 2015 razón por la cual, considera que para la época del siniestro éste era el propietario del vehículo y se encontraba afiliado a la demandada, sin que se pueda atender a lo manifestado en la respuesta del RUNT en cuanto a la titularidad del rodante.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Se surte el grado jurisdiccional de **consulta** en favor de la parte demandante, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por los demandados y la decisión de primera instancia, se tiene que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** si entre el demandante y la sociedad Sotra San Vicente y Guatapé –La Piedra S.C.A y el señor Neftalí Arbeláez, existió o no contrato de trabajo, cuáles fueron sus extremos temporales, y remuneración; **b)** si en la ocurrencia del accidente que sufrió el hoy demandante se presentó o no culpa patronal. De ser afirmativa la respuesta, se determinará; **c)** si hay acreencias derivadas de la culpa patronal y; **d)** si hay lugar al reconocimiento y pago de pensión de invalidez.

Documental relevante aportada por las partes

- Ramón Antonio Rivera Arias nació el 30 de marzo de 1961¹⁸.
- Dictamen médico-legal de lesiones no fatales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fechado el 16 de septiembre de 2004.¹⁹

¹⁷ 15PronuniamientoDemandante

¹⁸ 01ExpedienteEscaneado, págs. 158, si bien no se aporta documento idóneo que prueba la fecha de nacimiento, la misma se extrae del dictamen de pérdida de capacidad laboral, sin que exista objeción de la parte demanda respecto a tal fecha.

¹⁹ 01ExpedienteEscaneado, págs. 24

- Apartes de la historia clínica del demandante²⁰.
- Valoración audiológica realizada al demandante el 04 de junio de 2012²¹
- Valoración audiológica realizada al demandante el 18 de julio de 2012²²
- Valoración audiológica realizada al demandante el 01 de agosto de 2012²³
- El **5 de febrero de 2013**²⁴ la Personería de San Rafael indicó que ***“Se expidió certificación a nombre del señor Ramón Rivera Arias como víctima del atentado con bomba o artefacto explosivo, en hechos ocurridos el día 15 de mayo de 2004 en zona urbana de este municipio, específicamente en el establecimiento de comercio “el Cafetín” ubicado en el parque principal. La certificación indica que el precitado ciudadano sufrió heridas consistentes en politraumatismo, que generaron una incapacidad de carácter permanente (según dictamen médico general). Por último, la constancia fue expedida con fundamento en el artículo 18 de la ley 418 de 1997, con el fin de acceder a la asistencia humanitaria allí prevista para las víctimas del conflicto armado interno.”***
- Respuesta a petición emitida por el Municipio de San Rafael, el 22 de febrero de 2013²⁵, mediante la cual se aclara que la explosión ocurrió el 15 de mayo de 2004 entre las 12:15pm y las 12:30 pm, en el parque principal, específicamente en el “pequeño negocio llamado “el Portal” ubicado a 12 metros de la Alcaldía Municipal, relacionando entre los afectados en grave estado al demandante.
- Copia del listado de atención a pacientes del atentado terrorista por parte del Hospital Presbítero Alonso María Giraldo de San Rafael.²⁶
- La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Ramón Rivera el 22 de agosto de 2012, dictaminando una pérdida de capacidad laboral del **60,92%**, de **origen común y fecha de estructuración del 09 de mayo de 2012**²⁷.

Respuesta a Pruebas decretada de oficio en segunda instancia:

- El 23 de febrero de 2022 la coordinadora de Grupo Regional de Clínica Forense allega copia del dictamen médico Legal de lesiones no fatales²⁸.

²⁰ 01ExpedienteEscaneado, págs. 23, 25/52

²¹ 01ExpedienteEscaneado, págs. 152

²² 01ExpedienteEscaneado, págs. 1523

²³ 01ExpedienteEscaneado, págs. 154

²⁴ 01ExpedienteEscaneado, págs. 213/214

²⁵ 01ExpedienteEscaneado, págs. 220/221

²⁶ 01ExpedienteEscaneado, págs. 222

²⁷ 01ExpedienteEscaneado, págs. 157/165

²⁸ 05RespuestaMedicinaLegalDictamen

- La Secretaría General y de Gobierno de San Vicente indica que no cuenta con información vehículos registrados, ni quienes fueron sus propietarios²⁹.
- La Secretaría General y de Gobierno de San Rafael indica que dentro de las empresas de transporte que operan en dicho municipio y son habilitadas por el municipio no se encuentra el vehículo de placas WLJ944³⁰.
- El jefe de servicios de información Yesid Gerardo Rojas Wills remite correo electrónico el 08 de abril de 2022, mediante el cual indica que en la base de datos del RUNT se registra el histórico de propietarios del vehículo con placas WLJ944, de donde se extrae que dicho vehículo entre el 01 de enero de 1986 y el 02 de junio de 2010 perteneció a la señora Rosa Elena Zapata Escobar y estuvo afiliado a la empresa “Internacional de Turismo S.A.” en la dirección territorial de Quindío³¹.
- El Ministerio de Transporte, mediante oficio del 11 de abril de 2022 informó que para el 15 de octubre de 2004 el vehículo de placas WLJ944 estaba afiliado a la empresa de Transporte Guatapé La Piedra y Cía. Ltda, y vinculado al organismo de transito “Agencia de seguridad vial Antioquia/Guarne”³².
- Tarjeta operativa del vehículo de placas WLJ944, en la cual figura el señor Francisco Luis Gómez como propietario³³.
- Formulario de revisión técnico-mecánica N° 03079 del 06 de diciembre de 2004, en el cual figura como propietario del vehículo de placas WLJ944, el señor Guillermo Salazar Ramírez³⁴.
- Contrato de administración del vehículo de placas WLJ944, suscrito por Francisco Luis Gómez como propietario y la empresa de transportes Guatapé la Piedra y Cía. Ltda³⁵.
- Matrícula del vehículo de placas WLJ944, a nombre de Transportes Guatapé la Piedra y Cía. Ltda. Rutas autorizadas ³⁶.
- Copia de tarjeta de un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual y Responsabilidad Contractual cuyo tomador es Transportes Guatapé la Piedra (sic) y el asegurado el señor Guillermo de Jesús Salazar³⁷.
- Licencia de tránsito del vehículo de placas WLJ944 a nombre de Guillermo de Jesús Salazar y Neftalí Arbeláez Hincapié³⁸.

²⁹ 06RespuestaSecretariaGobiernoSanVicente

³⁰ 06RespuestaSecretariaGobiernoSanRafael

³¹ 10RespuestaRunt

³² 11RespuestaMinisterioTransporte

³³ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 9

³⁴ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 10

³⁵ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 11/15

³⁶ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 16

³⁷ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 17

³⁸ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 17

- SOAT N° 1324 del 29 de octubre de 2004 por el vehículo de placas WLJ944 cuyo tomador es el señor Francisco Luis Gómez³⁹.
- Resolución de vehículos asegurados por Colpatria por la póliza RCE6158000065 RCC 6158000063, en la que se encuentra el vehículo de placas WLJ944 y figura como tomador transportes Guatapé la Piedra (sic) y como asegurado Neftalí Arbeláez⁴⁰.
- La Secretaría de Gobierno de Antioquia informa que el automotor de placas WLJ944 figura a nombre de persona indeterminada, que **para el 15 de mayo de 2004 figuraban como propietarios los señores Neftalí Arbeláez Hincapié y Guillermo de Jesús Salazar**, la propiedad inscrita en un 50% se registró por traspaso que el 19 de octubre de 1994 les hizo la señora Adela Gómez Hincapié Mabignier y que por certificación 383 del 18 de octubre de 2005 la dirección Territorial del Ministerio de Transportes de Antioquia informó la desvinculación administrativa de mutuo acuerdo del contrato celebrado con la empresa Transportes Guatapé la Piedra⁴¹. Adjunta los documentos que soportan tal certificación.

Ahora, para definir el problema jurídico planteado se acudirá al precedente normativo y jurisprudencial en la materia.

a) Relación laboral entre Ramón Antonio Rivera Arias con Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra y el señor Neftalí Arbeláez.

Para determinar la procedencia de las acreencias laborales reclamadas, es necesario establecer previamente, si efectivamente el demandante para Sotrasanvicente & Guatapé La Piedra y el señor Neftalí Arbeláez, o en Vehículo de propiedad del demandado y afiliado a esa empresa de transporte, en caso afirmativo, cuáles fueron los extremos temporales de esa relación, y su remuneración.

Para decidir de fondo sobre el problema jurídico, se debe atender a los arts.23 y 24 del CST, que consagran:

“ARTICULO 23. 1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

³⁹ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 18

⁴⁰ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 23

⁴¹ 12RespuestaGerenciaSeguridadVial

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.

ARTICULO 24. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

Conforme al artículo 167 del CGP, incumbe a los demandantes demostrar su dicho, con miras obtener el pago de los derechos reclamados en la demanda, debiendo acreditar la prestación personal del servicio remunerado y los extremos temporales alegados en la demanda; siendo del resorte del demandado, desvirtuar que el servicio se prestó bajo subordinación⁴².

En el trámite surtido de primera instancia, se practicaron sendos interrogatorios de parte al señor Neftalí Arbeláez Hincapié, a Pascual Darío Vanegas Morales -representante legal de Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra- y a Ramón Antonio Rivera Arias; y se recibieron los testimonios de Jaime de Jesús Castro García, Guillermo de Jesús Salazar Ramírez, Luis Efrén Gil Franco y Millerlay del Socorro Vásquez Castañeda, quienes en lo que interesa a la relación laboral indicaron lo siguiente:

Neftalí Arbeláez Hincapié ⁴³ -Demandado-	Negó que el Bus le perteneciera, por tener solamente una participación equivalente a la tercera parte, dicho vehículo era conducido por Jaime Olivo Castro quien se entendía con todo lo relacionado al bus . Manifiesta que a partir del año 2002 y hasta el mes de mayo de 2004 , el señor Jaime Castro era el único que administraba o manejaba el bus , junto con la empresa, desconociendo él donde mantenía el vehículo. El día de la explosión, el 14 de mayo de 2004, se encontraba en Guatapé, dónde vive y, no sabe qué hacía el bus de su copropiedad para esta fecha, ni donde estaba tampoco, pues no se mantenía enterado de esto, ni hacía preguntas al respecto. Indicó que la empresa pagó un dinero al señor Rivera Arias seguramente porque había trabajado, pero él no lo conocía . Fue él, directamente, el que le dio el dinero, por “colaborarle” y no recuerda el valor de dicho pago.
Pascual Darío Vanegas Morales ⁴⁴ -Representante legal de Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra-	Expresó desconocer la información relativa al proceso y a la relación laboral demandada en tanto llevaba mes y medio como representante legal de la empresa, pese a que sostuvo que de todo vehículo se llevaba una carpeta física. Igualmente sostuvo que la empresa no tiene contrato con los propietarios de los vehículos.

⁴² SL 5587 de 2018, SL 5029 de 2018 -hace a su vez transcripción parcial de la SL 6621 de 2017 y 40273 de 2011, entre otras-.

⁴³ 01ExpedienteEscaneado, págs. 102/103

⁴⁴ 01ExpedienteEscaneado, págs. 104

Ramón Antonio Rivera Arias⁴⁵ -Demandante-	<p>Sostuvo que fue Jaime Castro quien lo contrató para laborar en el bus con placas WLJ-944, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2004, sin que le realizara afiliación o aseguramiento. No tenía salario fijo pues le pagaba un porcentaje de lo recaudado equivalente entre veinte mil y cien mil pesos, dependiendo de cómo les fuera diario. Conoció al señor Neftalí Arbeláez desde hacía unos veinte años, pero él únicamente lo distinguía de saludo. En el momento de la explosión que le causó lesiones se encontraba en la taquilla Guatapé La Piedra, en San Rafael, recogiendo pasajeros para salir con destino a Medellín, señala que no estaba dentro de la taquilla sino que estaba afuera haciendo “tiquetiar” a las personas; que tenía llaves del bus, porque se las había facilitado el señor Jaime Castro, quien por demás era el que le daba órdenes para la prestación del servicio, el señor Neftalí nunca le dio órdenes, pues únicamente lo saludaba. Finalmente expresó que recibió un pago del Estado con ocasión a la explosión que correspondió a dos salarios mínimos.</p>
Jaime de Jesús Castro García⁴⁶ -Testigo-	<p>Sostuvo que Ramón Rivera era su ayudante, que hacía muchos años eran amigos y conocidos. Que manejó un bus de Guatapé las Piedras y el demandante le pidió que lo llevara para San Rafael o San Carlos, aunque fuera de “<i>pato</i>” ya que no tenía trabajo y a los muchos días le pidió que le diera trabajo en el bus y por eso se lo llevó a trabajar. Que se hacía una rotación de cinco a seis viajes y luego descansaban cinco o seis días; el señor Ramón Rivera como ayudante, trabajaba por un porcentaje del 20% de lo que se recogiera en cada viaje. Trabajaron juntos muchas rotaciones, más o menos la mitad del tiempo en el bus de placas WLJ944 cuyos dueños eran Guillermo Salazar, Neftalí Arbeláez y Jaime Castro. Admitió ser quien le pagaba al demandante por ser quien lo había buscado y manejaba el vehículo. Neftalí Arbeláez, ni Salazar buscaban a los ayudantes, ellos ni siquiera los distinguían. Del atentado recuerda que fue un sábado, hace más de seis años, iba a salir para Medellín junto con don Ramón de ayudante, a la una y media de la tarde <u>parqueó el bus al pie de la taquilla y más o menos a los 20 minutos de haberse parqueado allí, explotó la bomba, quedando lesionado, entre otras personas el señor Ramón Rivera</u>; el carro quedó bastante dañado, quedó inservible por lo que después de eso, no hubo ningún otro viaje. Señala que el señor Ramón desempeñaba las funciones de abrir las bodegas, recibía las maletas, ayudaba a los pasajeros y cobraba los pasajes; las órdenes las impartía él como conductor e igualmente le pagaba. Respecto a las lesiones con ocasión del accidente, manifiesta el testigo que el actor <i>“se porreo por todas partes, le quedaron secuelas en los pies, en la rodilla, prácticamente todo el cuerpo”</i></p>

45 01ExpedienteEscaneado, págs. 105/106

46 01ExpedienteEscaneado, págs. 108/112

	<p>(sic); indica que el demandante recibió de parte del señor Neftalí Arbeláez, Guillermo Salazar y Jaime Castro una indemnización. Señaló que el 20% que pagaba al ayudante oscilaba entre veinte y cincuenta mil pesos. Manifestó Jaime de Jesús Castro que su porcentaje de participación en la copropiedad del vehículo era de una tercera parte, es decir un 30%, además, era el encargado de la administración del bus porque sus compañeros le tenían buena confianza, le indicaban “los patrones” que se entendiera con el ayudante, el cambio de aceite, ACP, parqueo, montada de llantas y cuando necesitaba dinero, debía acudir a la oficina. Neftalí Arbeláez y Guillermo Salazar eran socios, y lo autorizaban para que consiguiera ayudante. El demandante trabajó aproximadamente de ocho a diez meses, en el año 2004. El carro lo “chatarizaron” y no existen soportes documentales donde conste su participación en la sociedad con los otros copropietarios del bus.</p>
<p>Guillermo De Jesús Salazar Ramírez⁴⁷ -testigo-</p>	<p>Indicó que tenía en sociedad un carro para San Rafael, con Neftalí Arbeláez y Jaime Castro, que en cierta ocasión ocurrió una explosión cerca de donde se encontraba el Bus y Jaime Castro les indicó que esa explosión había generado varios daños materiales y varios lesionados entre ellos una persona que se encontraba a cargo de Jaime. Jaime Castro era el encargado de todo el manejo del carro –conducir, liquidar y entregarles el producido y las cuentas- también se encargaba de buscar el ayudante, pero no sabe quién le pagaba, directamente no le pagó a nadie, salvo una recolecta que realizó Jaime para indemnizar a alguien por unas lesiones, sostuvo que no supo quién era, pero aportaron un pequeño dinero. En varias oportunidades le llamó la atención a Jaime porque los fondos estaban poquitos, indicándole que debía hacer rendir las cuentas a los socios. Nunca le dio dinero de forma directa al demandante y vendieron el vehículo incluso afectado por la explosión.</p>
<p>Luis Efrén Gil Franco⁴⁸ -Testigo-</p>	<p>Manifestó que el demandante trabajaba en un bus de la empresa demandada, desconociendo todos los aspectos relativos a la relación laboral como las placas del vehículo, los extremos de la relación laboral, el tipo de contrato, o sus empleadores. Sostuvo que sabe que el demandante era el ayudante porque él iba mucho al Peñol y lo veía en el mismo bus haciendo las funciones del ayudante como guardar las maletas, bajarlas y subirlas, recoger el pasaje. Así mismo indicó que Ramón luego del accidente que sufrió en San Rafael quedó cojo.</p>

⁴⁷ 01ExpedienteEscaneado, págs. 112/114

⁴⁸ 01ExpedienteEscaneado, págs. 116/119

Millerlay Del Socorro Vásquez Castañeda⁴⁹ -Testigo-	Indicó que el señor Rivera laboraba en la flota en SOTRASANVICENTE donde trabajó mucho tiempo como ayudante , pues lo veía en los buses recibiendo los tiquetes e incluso le llegó a comprar tiquetes a ella; sin embargo, desconoce la relación laboral que este tenía, sus condiciones o lo que percibía como remuneración salarial. Por comentarios que le hizo la esposa del demandante se enteró del atentado ocurrido cuando Ramón se encontraba trabajando y le dejó un pie con esquirlas debiéndose someter a varias cirugías.
---	---

De este modo, la testimonial da cuenta de que, si bien el demandante no fue convocado a trabajar por Neftalí Arbeláez Hincapié en calidad de copropietario de vehículo de placas WLJ944 o por la empresa de transporte Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra, no puede descartarse -como hizo la A quo-, la existencia de la relación laboral, pues el actor logró probar que si laboró en calidad de “ayudante” bajo la subordinación de Jaime Castro quien era el conductor del vehículo cuyos propietarios para la fecha del siniestro eran Neftalí Arbeláez Hincapié y Guillermo de Jesús Salazar⁵⁰ y quienes manifestaron haberle otorgado al señor Castro, la administración del bus ya identificado, el cual se encontraba afiliado a la empresa Transportes Guatapé la Piedra⁵¹.

Al respecto ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en un caso de similares contornos expresó:

Ahora bien, si se tiene en cuenta que Ciro Anaya Buitrago fungió como Jefe de Rutas de la empresa, es claro que tenía la capacidad para obligarla frente a los trabajadores, en los términos del artículo 32 del CST. E incluso desde tiempo atrás así lo ha reconocido esta Corporación CSJ SL 22, abr, 1961 al decir:

Según lo han expresado esta Sala de la Corte y el extinguido Tribunal del Trabajo, en reiteradas decisiones, los directores, gerentes, administradores y los demás que el artículo 32 indica constituyen ejemplos puramente enumerativos de empleados que ejercen funciones de dirección o administración. Los empleados de esta categoría se distinguen porque ocupan una especial posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias y de mando, no están en función simplemente ejecutiva, sino orgánica y coordinativa, con miras al desarrollo y buen éxito de la empresa, están dotados de determinado poder discrecional de autodecisión y ejercen funciones de enlace entre las secciones que dirigen y la organización central.

De donde surge, que lo que aquel indique sobre los extremos de la relación, sus características y las actividades realizadas por los actores, deba ser

⁴⁹ 01ExpedienteEscaneado, págs. 119/121

⁵⁰ 12RespuestaGerenciaSeguridadVial, según lo manifiesta dicha entidad, adscrita a la Gobernación de Antioquia

⁵¹ 12RespuestaGerenciaSeguridadVial

*tenido en cuenta al momento de definir la presente controversia, en tanto tiene valor probatorio y está corroborado su dicho con las demás probanzas.*⁵²

Así mismo, dicha Corporación ha indicado:

(...) el artículo 36 de la Ley 336 de 1996, que modificó el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, preceptuaba que «los conductores de transporte público son contratados por la empresa operadora de transporte, quien, para todos los efectos, es responsable solidaria junto con el propietario del vehículo». Esto significa que, en principio, las empresas de transporte son las empleadoras y principales responsables de los derechos laborales del actor; luego, surge manifiesto que la presencia de los propietarios de los vehículos no es imprescindible para efectos de emitir una condena en contra de la sociedad.

*Lo enunciado no significa que los propietarios de los vehículos de transporte público no tengan asignadas a su cargo responsabilidades económicas sobre los trabajadores, pues es claro que también se benefician de la explotación económica del negocio; diferente, es que como se mencionó, su vinculación al proceso no resulta imprescindible, dado que quien opera como empleador y deudor principal a la luz de lo dispuesto en la referida norma es la empresa operadora de transporte; en este caso, Cootransocial Ltda.*⁵³

En efecto, en la sentencia CSJ SL, 2 oct. 2007, rad. 29809 se indicó:

Aun así, contrario a lo afirmado por la impugnante, el sentenciador de segundo grado no incurrió en el desatino indicado. En efecto, el ad quem consideró que TAXCONSOTA no incurrió en falsedad al momento de vincular como su trabajador a FABER PELÁEZ, pues de “...antaoño existen normas de orden público que indican que es esa precisamente la forma que reviste la relación entre el conductor de un vehículo y la respectiva empresa...”, para luego entrar a analizar el artículo 15 de la Ley 15 de 1959.

*Por su parte, el indicado **artículo 15 de la Ley 15 de 1959** prevé que:*

“...El contrato de trabajo verbal o escrito de los choferes asalariados del servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efectos del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables”.

Así las cosas, ésa es la interpretación correcta de la preceptiva en cuestión, sería conveniente transcribir cuál es la interpretación a que se refirió la Corte) pues el legislador tuvo en cuenta que la solidaridad entre las empresas de transporte público y los propietarios de los vehículos, sólo aplicaba en tratándose de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, mas no respecto de la existencia del contrato de trabajo, pues al tema determinó taxativamente tal disposición legal, se entendía

⁵² Sentencia SL939 de 2018

⁵³ Sentencia SL208 de 2023

celebrado <entre la empresa respectiva y el chofer o conductor de servicio público>, como acertadamente lo infirió el Tribunal al concluir que “Por manera que establecida la obligación de contratar por sí misma a los conductores...”(fl.14), lo que evidencia que el entendimiento que le dio el sentenciador de alzada a tal preceptiva, es el que corresponde, amén de que es una de las normas legales que regulan los contratos de trabajo de los conductores o choferes del servicio público.

Vale decir, que con independencia de la calidad jurídica que el conductor del carro de servicio público tenga respecto de éste, es decir, si es su dueño o no, la ley prevé que por el hecho de prestar ese servicio y en esa clase de automotores, la relación de tal operador se da directamente con la empresa a la que está afiliado el vehículo, bajo la modalidad de un contrato de trabajo.⁵⁴

Conforme a lo anterior, esta Sala de Decisión considera que, en efecto existió una relación laboral entre el señor Ramón Antonio Rivera Arias y la empresa Sotrasanvicente y Guatapé la Piedra, pues se encuentra probado que el vehículo de placas WLJ944, entre el 03 de febrero de 2003 y durante el año 2004 estuvo afiliado a dicha empresa de transportes⁵⁵, siendo por tanto, la empleadora del señor Jaime de Jesús Castro García conductor del automotor, quien con su dicho probó que empleó como su ayudante al aquí demandante, impartándole órdenes y remunerando su servicio a razón del 20% del producido que oscilaba entre \$20.000 y \$50.000 por viaje. Resultando claro que existió anuencia para tal contratación por parte de los propietarios del vehículo y de la empresa de transportes, última que aun cuando no realizó manifestación de donde se pueda extraer confesión, no demostró que se hubiera opuesto a que el demandante prestara sus servicios en calidad de ayudante en el vehículo cuya administración tenía a cargo dicha empresa.

Lo anterior, resulta suficiente para formar el convencimiento judicial en torno a la existencia de la relación o múltiples relaciones laborales, derivadas de la prestación personal del servicio, la remuneración por porcentaje como contraprestación por el servicio, así como la subordinación que se presume, por la índole de las labores desempeñadas, y aun cuando no se precisaron extremos cronológicos de cada una de las relaciones laborales que los ligaron, se atenderá a lo indicando por el señor Jaime de Jesús Castro en torno a que el actor estuvo vinculado hasta la fecha del incidente y al menos entre ocho y diez meses antes, es decir entre el 15 de julio de 2003 y el 15 de mayo de 2004 fecha ultima en la que ocurrió el atentado terrorista, sin embargo, se percibe que la vinculación no era continua, sino por viaje realizado.

Debiéndose por tanto **revocar la sentencia** de primera instancia, que se conoce en grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, para en su lugar, declarar la existencia de la relación laboral entre el demandante y Sotrasanvicente y Guatapé la Piedra, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los propietarios del vehículo.

Establecida la existencia de la relación laboral, resulta necesario abordar los demás aspectos del problema jurídico así:

⁵⁴ Sentencia SL874 de 2023

⁵⁵ 11RespuestaMinisterioTransporte, pág. 4

b) Culpa patronal en la ocurrencia del accidente padecido por el trabajador

En torno a este aspecto, es necesario indagar si existe nexo causal entre las circunstancias en que acaeció el accidente del demandante y su labor, y en caso afirmativo establecer la existencia de culpa suficientemente probada del empleador.

Al respecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó:

(...) la culpa se ha de comprobar de cara a los deberes de prevención de los riesgos laborales que corresponden al empleador y se configuren como causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral. Para establecer la culpa, se evaluará la conducta del empleador, esto es, si él actuó con negligencia o no en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores que le corresponden para evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo el estándar de la culpa leve que define el art. 63 del CC.

*La culpa leve implica que el incumplimiento que hace al empleador merecedor de la condena por reparación plena de perjuicios es aquel que se da por la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, frente al deber de tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo laboral sucedido, y **no se puede determinar la culpa por la simple ocurrencia del infortunio laboral, ya que el empleador no tiene una obligación de resultado**, es decir, no está obligado a que el siniestro no ocurra, sino que sus obligaciones de protección y seguridad son de medio (CSJ SL1073-2021). Él siempre podrá probar la diligencia y cuidado que debió emplear para evitar el riesgo laboral en cuestión, según el art. 1604 del CC.⁵⁶ (negrillas propias de la Sala)*

Ahora, si bien la jurisprudencia⁵⁷ ha señalado que al trabajador le basta con enunciar las omisiones en las que incurrió el empleador para que se invierta la carga de la prueba respecto a la culpa, también ha sostenido que en cuanto al nexo causal entre la culpa y el daño, el trabajador debe señalar en que consistió la omisión del empleador y establecer la conexidad del siniestro y la labor, sosteniendo que “*nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha dado causa o contribuido a él*”⁵⁸

Ello así, se tiene que el artículo 216 del CST consagra:

“Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo”

Una vez analizada la prueba recaudada en el proceso, la Sala arriba a la conclusión que, en efecto el accidente padecido por Ramón Antonio Rivera Arias el 15 de mayo de 2004, se presentó mientras éste desarrollaba las labores de ayudante del bus de transporte público, situación demostrada con la prueba testimonial recaudada,

⁵⁶ Sentencia SL1897 de 2021

⁵⁷ Sentencias SL13653 de 2015, SL7181 de 2015, SL 7056 de 2016, SL12707 de 2017, SL2168 de 2019, SL5154 de 2020, SL1897 de 2021 entre otras.

⁵⁸ Sentencia SL2336 de 2020, reiterada en la SL1897 de 2021

especialmente la declaración rendida por el señor Jaime de Jesús Castro -conductor del vehículo-, quien reconoció que al momento de la explosión, el aquí demandante estaba realizando labores como ayudante del bus en razón al viaje que iban a iniciar hacia Medellín.

Sin embargo, tal y como se expuso en precedencia no basta la simple ocurrencia del hecho en el ámbito laboral o la afirmación del trabajador de la existencia de culpa del empleador en la ocurrencia del accidente, para que ésta se configure, han de verificarse las condiciones en que éste se produjo y la responsabilidad en que haya incurrido Sotrasanvicente & Guatapé la Piedra, frente al trabajador. Doliéndose el libelista en su demanda de la omisión del empleador de afiliarlo al Sistema de Seguridad Social integral, sin embargo, al observarse que el actor fue víctima de un atentado terrorista perpetrado por grupos al margen de la Ley, esa omisión no tiene la fuerza para invertir la carga de la prueba en relación con la culpa del empleador, sin que obre prueba en el plenario que la acredite, pues si bien la falta de afiliación constituye un incumplimiento en las obligaciones del contrato, éste conlleva otras consecuencias diferentes a la de tener por demostrada tal culpa.

Finalmente, para la Sala no existe nexo causal entre la actividad de ayudante de conductor desplegada por el demandante y el atentado terrorista perpetrado en el Municipio de San Rafael, debiéndose concluir que el daño sufrido por el actor es imputable exclusivamente al hecho de un tercero que constituye un eximente de tal responsabilidad. Consecuentemente se absolverá a los demandados de la pretensión de culpa patronal en el accidente laboral sufrido por el actor en virtud de los hechos acaecidos en el Municipio de San Rafael el 15 de mayo de 2004, atribuibles a grupos al margen de la Ley, deviniendo improcedente por esa razón examinar los perjuicios que se derivan en caso de haber existido dicha culpa.

c) Procedencia del reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo del empleador

En cuanto a la pensión de invalidez de origen laboral, debe advertir la Sala que el artículo 9 de la Ley 776 de 2002 dispone:

ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, ***se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.***

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas. (negrillas y subrayas fuera de texto)

De donde se desprende que a la luz del dictamen de pérdida de capacidad laboral obrante en el plenario⁵⁹ no es posible tener al demandante como persona inválida por efectos del riesgo laboral, pues si bien ostenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, ésta fue dictaminada como de origen común y estructurada el 09 mayo de 2012, fecha para la cual habían transcurrido casi ocho años desde el accidente laboral; sin que para el caso pueda atribuirse validez al dictamen médico-legal de lesiones no fatales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 16 de septiembre de 2004⁶⁰ que conceptúa a petición del Municipio de San Rafael una pérdida de capacidad laboral del 75%, el cual, pese a ser un concepto de médico legal de lesiones no fatales, no da cuenta del manual único de pérdida de capacidad laboral exigido para dictaminar tal pérdida de capacidad laboral, ni refiere fecha de estructuración, razón por la cual, no cumple con el criterio normativo para validar la invalidez.

No obstante, debe analizar la Sala si cumple con los presupuestos para el acceso a la pensión de invalidez de origen común a cargo del empleador dada la omisión en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que, por regla general, tal prestación se regula por la norma vigente a la fecha de estructuración de la PCL.

En el sub judice se tiene que, (i) la naturaleza de la PCL definitiva del hoy demandante es de origen común -según dictamen ordenado oficiosamente en la primera instancia-, practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con fundamento en el Decreto 917 de 1999 que contiene el Manual Único de Calificación de Invalidez, y determina con base en los **diagnósticos de diabetes Mellitus, hipertensión esencial primaria, hipoacusia neurosensorial bilateral e hipotiroidismo** (ii) que dicha PCL asciende al 60,92%; (iii) con fecha de estructuración del 09 de mayo de 2012, es decir, en vigencia la ley 860 de 2003⁶¹.

⁵⁹ 01ExpedienteEscaneado, págs. 157/165

⁶⁰ 01ExpedienteEscaneado, págs. 24

⁶¹ 01ExpedienteEscaneado, págs. 162/165

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
ANTIOQUIA

MEDICO PONENTE: CESAR AUGUSTO OSORIO VELEZ

CASO: RAMONANTONIO RIVERA ARIAS

CEDULA: 70950839

ENTIDAD REMITENTE: JUZGADO 5 LABORAL DE DESCONGESTION RADICADO: 39989

FECHA DE AUDIENCIA: 22 DE AGOSTO DE 2012

FUNDAMENTOS DE HECHO:

ANTECEDENTES: Paciente de 51 años, procedente de Medellín, ocupación desempleado. El Juzgado 5 Laboral de descongestión remitió el caso para asignación de pérdida de capacidad laboral, origen y fecha de estructuración del mismo.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA RESOLVER EL CASO:

-Se anexan consultas del año 2004 y siguientes por cefalea tensional versus migratoria y trastorno ansioso postraumático.

-El 16 de septiembre de 2004 **Reconocimiento médico legal**: Refiere “estalló un maletín bomba en el parque”.

CONCLUSION: MECANISMO CAUSAL: Explosivos. INCAPACIDAD MEDICO LEGAL. DEFINITIVA. CIEN (100) DIAS.

SECUELAS MEDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente, perturbación funcional de miembro inferior derecho y del órgano de la locomoción, de carácter permanente, perturbación funcional de órgano de la audición, de carácter permanente; perturbación síquica y perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente. Estas lesiones y Secuelas le producen una merma de la capacidad laboral del 75% (setenta y cinco) por ciento.

-El 12 de Diciembre de 2006 consulta se hace diagnóstico de hipotiroidismo.

-El 24 de Agosto de 2010 por antecedente de depresión postraumática actualmente sin tristeza patológica.

-El 28 de Agosto de 2010 consulta al hospital San Vicente de Paul encuentra un trastorno de la personalidad y un episodio depresivo moderado.

Dado lo anterior, para determinar si el afiliado causó o no la prestación reclamada, debemos remitirnos al artículo 38 de la Ley 100 de 1993 el cual dispone que *“para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”* Y al artículo 39 ibídem modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, donde se exige que el afiliado acredite haber “cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”.

-El 25 de Noviembre de 2010 antecedente de diabetes mellitus, cirugía en enero de 2010, para retiro de esquirlas en parte posterior de la pierna, requirió amputación del segundo dedo de pie izquierdo hace 3 meses.

-El 22 de Septiembre de 2011 consulta: Motivo de consulta tengo el pie caliente.

Antecedente de trauma por objeto de guerra, maletín bomba en pie derecho, el 14/05/2004 relata que le quedaron esquirlas de ese incidente. Lo han intervenido en 2 ocasiones para extraer esquirlas. Ahora con cuadro de una semana, inicialmente con sensación de presión en talón derecho, luego flictena y ulcera, según el paciente se extrajo un cuerpo extraño metálico en cara lateral pie derecho.

-El 04 de Abril de 2012 consulta: Su cuadro actual corresponde a pie diabético sobre infectado, por pobre control metabólico. El compromiso vascular no es significativo, y es muy distal. Ahora, es pertinente descartar OMC: Ortopedia ya programó para lavado. Se da de alta por Cirugía Vascular, para continuar manejo por Medicina Interna y Ortopedia. Plan: Alta por Cirugía Vascular Continúa manejo por Medicina Interna y Cirugía Vascular Justificación para que el paciente continúe hospitalizado: Pie diabético.

-El 09 de Abril de 2012 consulta médica: Paciente de 49 años con AP de DM2 con complicaciones micro y macrovasculares. nefropatía DM, EAOC/Pie DM, HTA, Secuelas post-TCE (Cefalea, SEP Traumático), hospitalizado hace 7 meses por ulcera talón derecho con fascitis necrosante por MorganelaMorganii y S, Haemolyticus, requirió manejo quirúrgico y tratamiento antibiótico (Vanco-pip/tazo x 14 días), no se tomaron cultivos de hueso. Ahora ingresa por úlcera en talón derecho complicada con sepsis y bacteriemia por MRSA; recibió tratamiento ATB con vancomidna por 5 días (además de Pip/Tz - Cefalotina) con pobre respuesta al tratamiento. Hoy fue valorado por el Grupo de Infectología quienes conceptúan que esto pudo deberse muy probablemente a diferencias demostradas in-vitro e in-vivo entre el medicamento genérico y la fórmula original, además de que el órgano fuente de la bacteriemia se encuentra amenazado por isquemia por lo que cambian tratamiento a Daptomicina + Rifampicina. absceso pequeño en cara anterior del tórax el cual drena totalmente material purulento en escasa cantidad. Se ordenan curaciones por Enfermería. En el momento en POP de lavado realizado por Ortopedia que encontró necrosis de la grasa subcutánea sin pus, se ajusta analgesia puesto que refiere intenso dolor. No hay signos de no viabilidad de la extremidad. Su control metabólico ha estado por fuera de las metas, pero debemos tener en cuenta que su proceso séptico a penas se está resolviendo, se ajusta insulina glulisina.

-El 09 de Mayo de 2012 consulta: **Paciente amputado por debajo de rodilla**, lesión en atentado terrorista y además agravado por su diabetes. Se retiran puntos de muñón intermedios

*Plan de evolución: cita por Fisiatría, cita por ortopedia en 3 semanas. Diagnósticos *DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS. E116

Antecedentes personales: Patológicos: **Diabetes más de 20 años insulínica, nefropatía diabética, hipertensión**, Quirúrgicos: **Amputación 2 dedo pie izquierdo 2010.**

Se anexan audiometrías seriadas del 04 de junio, 18 de Julio y 1° de agosto de 2012 que encontraron una **hipoacusia sensorial bilateral en oído derecho grado leve a profundo y en oído izquierdo de severo a profundo.**

VALORACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: **Paciente con amputación a nivel de tercio medio de la pierna derecha.**

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Para el caso que nos ocupa debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 8, del decreto 917 de 1999 la distribución porcentual de los criterios para la calificación total de la invalidez debe hacerse así: “Para realizar la calificación integral de la invalidez, se otorga un puntaje a cada uno de los criterios descritos en el artículo anterior (Deficiencia, discapacidad y minusvalía), cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, dentro de los siguientes rangos máximos de puntaje”: CRITERIO PORCENTAJE (%) Deficiencia 50 Discapacidad 20 Minusvalía 30 Otros fundamentos de derecho que se tuvieron en cuenta para el presente dictamen se encuentran en las siguientes normas: Ley 100 de 1993, crea las Juntas de Calificación. Decreto 1295 de 1994, reglamenta el Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP). Decreto 917 de 1999, determina el Manual Único de Calificación de Invalidez. Decreto 2463 de 2001, reglamenta el funcionamiento y competencia de las Juntas de Calificación. DIAGNOSTICOS MOTIVO DE CALIFICACION: . 1. DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS. E116 2. HIPERTENSIÓN ESENCIAL PRIMARIA. I10X 3. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL. H903 4. HIPOTIROIDISMO. E039

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN: La Sala Primera de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con los fundamentos de hecho y derecho expuesto considera que el paciente tiene los diagnósticos antes anotados que serán calificados de conformidad con el Manual de Calificación. En cuanto al **origen este es común, pues la mayoría y más importantes diagnósticos son debidos a enfermedad personal del paciente y no son secundarios al antecedente traumático, en otras palabras para la Junta Regional debido a la enfermedad diabética, la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, el compromiso vascular que llevó a la amputación de la pierna y ala nefropatía diabética fue que se ocasionó la invalidez del paciente y si bien Medicina Legal inicialmente consideró al paciente invalido aplicando una tabla o metodología que no se especificó, dichas alteraciones al día de hoy han disminuido incluso desaparecido (cefalea, síndrome de estrés post traumático).**

DEFICIENCIAS: 37.57%

DISCAPACIDADES: 5.60%

MINUSVALIAS: 17.75%

TOTAL: 60.92%

ORIGEN: Enfermedad común

FECHA DE ESTRUCTURACIÓN: 09 de mayo de 2012 (valoración médica).

Cesar Augusto Osorio V.

Medico Ponente R.M. 5917 Minsalud

De lo anterior se desprende que, si bien el actor presenta una invalidez de origen común superior al 50% y la parte demandada omitió su obligación de afiliarlo a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, no está llamada a responder por la obligación pensional, pues el demandante acepta que la relación laboral terminó el día del accidente laboral, mediando entre esa data y la estructuración de la invalidez más de los tres años que estipula la norma para acreditar la densidad de semanas que permiten acceder al derecho pensional, de suerte que para esa época el riesgo ya no se encontraba cubierto directamente por el empleador.

Lo anterior sin perjuicio de que directamente, el demandante acredite ante la respectiva entidad del sistema de seguridad social en pensiones, los requisitos para acceder a la prestación económica de invalidez por origen común.

Sin más elucubraciones al respecto, la Sala encuentra que la pretensión de pensión de invalidez tampoco tiene vocación de prosperar.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la pasiva se entienden implícitamente resueltas. Se resalta que no se demostró reclamación extraprocesal anterior a la demanda que se presentó cinco años después de la desvinculación laboral del actor, y de acaecido el accidente que éste sufrió, lo que torna inocuo abordar la posibilidad de una pérdida de capacidad laboral parcial derivada de accidente de trabajo, y de sus consecuencias patrimoniales, en razón a que estarían afectadas por prescripción.

IV. COSTAS

Por haberse conocido en grado jurisdiccional de consulta no hay lugar a condenar en costas en esta sede, y tampoco en primera instancia, porque a pesar de revocarse la sentencia de la Aquo, la decisión definitiva es absolutoria respecto de las pretensiones económicas del actor.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 31 de julio de 2014, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por RAMÓN ANTONIO RIVERA ARIAS contra SOTRASANVICENTE & GUATAPE LA PIEDRA Y NEFTALÍ ARBELÁEZ, para en su lugar declarar que entre el señor Ramón Antonio Rivera Arias y Sotrasanvicente & Guatapé La Piedra existió una relación laboral entre el 15 de julio de 2003 y el 15 de mayo de 2004, remunerado por viaje y en porcentaje del 20% del producido

que oscilaba entre \$20.000 y \$50.000 por viaje, según el número de pasajeros transportados.

SEGUNDO. Absolver a Sotrasanvicente & Guatapé La Piedra Y Neftalí Arbeláez de las pretensiones de indemnización plena de perjuicios y pensión de invalidez, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. Sin Costas en ambas instancias.

Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS